
SITUACIÓN EN LOS PAÍSES DE LA REGIÓN

ESTADOS, MOVIMIENTOS SOCIALES Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN AMÉRICA LATINA

Guillermo Alfredo Johnson

Dr. (Sociología Política), prof. (guillermo.alfredo@ufma.br)

Universidade Federal de Maranhão (UFMA)
Av. dos Portugueses, 1966 – Vila Bacanga, São Luís - MA, 65080-805,
Brasil

ORCID: 0000-0002-6508-3105

Marcos Antonio da Silva

*Dr. (Estudios sobre la integración de América Latina), prof.
(marcoasilva@ufgd.edu.br)*

Universidade Federal de Grande Dourados (UFGD)
R. João Rosa Góes, 1761 – Vila Progresso, Dourados – MS, 79825-070,
Brasil

ORCID: 0000-0003-1196-2814

Recibido el 17 de enero de 2025

Aceptado el 14 de junio de 2025

DOI: 10.37656/s20768400-2025-03-01

Resumen. *Los autores investigan el rol y el significado de los movimientos sociales en el proceso histórico de los países latinoamericanos en el siglo XXI en el caso de Bolivia, Brasil y México. La atención se centra en la naturaleza de las reformas neoliberales llevadas a cabo por los Estados y su impacto en la dinámica de los movimientos sociales. El artículo examina la configuración de las fuerzas políticas y los conflictos de intereses que ocurren entre las élites gobernantes, así como los factores que influyen en las protestas sociales y las demandas de los trabajadores.*

Palabras clave: *Estado, neoliberalismo, movimientos sociales, políticas públicas, América Latina*

Guillermo Alfredo Johnson, Marcos Antonio da Silva

**STATES, SOCIAL MOVEMENTS
AND PUBLIC POLICIES IN LATIN AMERICA**

Guillermo Alfredo Johnson

Dr. (Political Sociology), prof. (guillermo.alfredo@ufma.br)

Federal University of Maranhão (UFMA)
1966, Av. dos Portugueses – Vila Bacanga, São Luís - MA, 65080-805,
Brazil

ORCID: 0000-0002-6508-3105

Marcos Antonio da Silva

*Dr. (Studies on the Integration of Latin America), prof.
(marcoasilva@ufgd.edu.br)*

Federal University of Grande Dourados (UFGD)
1761, R. João Rosa Góes – Vila Progresso, Dourados – MS, 79825-070,
Brazil

ORCID: 0000-0003-1196-2814

Received on January 17, 2025

Accepted on June 14, 2025

DOI: 10.37656/s20768400-2025-03-01

Abstract. *The authors investigate the role and place of social movements in the historical process of Latin American countries in the 21st century in the case of Bolivia, Brazil and Mexico. Attention is focused on the nature of the neoliberal reforms carried out by the states and their impact on the dynamics of social movements. The article examines the configuration of political forces and the struggle of interests between the ruling elites, as well as the factors influencing social protests and demands made by workers.*

Keywords: *State, neoliberalism, social movements, public policies, Latin America*

ГОСУДАРСТВА, СОЦИАЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ И ПУБЛИЧНАЯ ПОЛИТИКА В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ

Гильерму Алфреду Джонсон

Д-р (Политическая социология), профессор (guillermo.alfredo@ufma.br)

Федеральный университет Мараньяна
Бразилия, 65080-805, Сан-Луис, Авенида дус Португезис, 1966 – Вила
Баканга

ORCID: 0000-0002-6508-3105

Маркус Антониу да Силва

*Д-р (Исследования по интеграции Латинской Америки), профессор
(marcossilva@ufgd.edu.br)*

Федеральный университет Гранди-Доурадус
Бразилия, 79825-070, Доурадус, Руа Жуан Роза Гоис, 1761 – Вила
Прогресу

ORCID: 0000-0003-1196-2814

Статья получена 17 января 2025 г.

Статья принята 14 июня 2025 г.

DOI: 10.37656/s20768400-2025-03-01

Аннотация. Авторы исследуют роль и место социальных движений в историческом процессе латиноамериканских стран в XXI веке на примере Бразилии, Мексики и Боливии. Внимание сосредоточено на характере проводимых государством неолиберальных реформ и их влиянии на динамику социальных движений. Рассматривается конфигурация политических сил и борьбы интересов в правящих элитах и факторы, влияющие на социальные протесты и требования, выдвигаемые трудящимися.

Ключевые слова: государство, неолиберализм, социальные движения, государственная политика, Латинская Америка

Introducción

La lucha social que caracteriza la formación social y político-económica latinoamericana adquiere nuevos contornos en el siglo XXI. Los movimientos sociales, con un amplio espectro de reivindicaciones, ocupan cada vez más la escena política y en el consiguen incidir en las políticas estatales. Las determinaciones con que la hegemonía mundial incide en América Latina se fusionan con las fuerzas internas de cada país, creando las condiciones para que el Estado y sus políticas determinen el panorama institucional. Resaltando la pertinaz e histórica heterogeneidad estructural y dinámica de América Latina y el Caribe, el análisis de su inserción en el sistema mundial permite, desde el punto de vista de la heteronomía, evaluar la región como un conjunto.

Desde los albores de la configuración del moderno sistema-mundo colonial, la inserción latinoamericana, por una diversidad de mecanismos de explotación e expoliación, se encuentra en una condición subalterna [1, 2]. Durante más de cinco siglos – más allá de discursos populistas, espejismos coyunturales y dimensiones del producto interno bruto – no hubo movilidad vertical en la jerarquía geopolítica global para los países al sur del Rio Bravo.

En el transcurso de la formación de los Estados se consolidaron sectores nacionales dominantes con diversa consistencia en los países latinoamericanos, en su mayoría herederos de las relaciones coloniales – este proceso sucede aproximadamente desde inicios del siglo XIX hasta las tres primeras décadas del XX –, permitiendo la constitución de bloques económico-políticos de carácter marcadamente oligárquico [3, 4], fuertemente sustentados por la apropiación de grandes extensiones de tierra para reafirmar la “vocación” extractiva [5]. Los casos más relevantes, considerando sus dimensiones territoriales y geopolíticas, son Argentina, Brasil y México, pero prácticamente en todos los países de la región las

clases dominantes y/o asociadas al capital transnacional concentran parte considerable de las riquezas, así como desempeñan importantes papeles en los procesos de toma de decisión a nivel nacional.

Al mismo tiempo, una inmensa masa de trabajadores han incesantemente luchado por mejorías en sus condiciones de vida, experimentando instantes de relativa bonanza. Ante la recomposición de las fuerzas hegemónicas, esta dinámica es contenida, cuando no provoca el recrudecimiento de las condiciones de pobreza para la mayoría de la población.

Después de una aguda implementación de políticas neoliberales, especialmente a partir del último cuarto del siglo pasado – destacando que en su última década hayan ocurrido preponderantemente en democracias formales –, el inicio del siglo XXI se distingue por el despliegue de movilizaciones multitudinarias, rememorando radicalismos y exhibiendo la fructífera e inherente creatividad de las manifestaciones colectivas, volviendo a ubicarse así en el centro de la escena política de sus países, e inclusive fortaleciendo o creando instancias de participación popular.

La intensidad de los protestas, expresión ~~más~~ evidente de la sociedad ante la intensa expoliación que empujó a millones de personas por debajo de la línea de la pobreza en diversos países latinoamericanos, redundó en la reducción del ritmo de aplicación de las contrarreformas neoliberales, moderando coyunturalmente el abismo en la distribución de rentas con políticas sociales de compensación de ingresos, creación de empleos y promoción del consumo [6].

En el presente trabajo se analiza la relación dinámica entre Estados y movimientos sociales en América Latina durante la primera década y media del siglo XXI, destacando para tal efecto los casos de Bolivia, Brasil y México. Entre sus objetivos se destacan: la interferencia de los movimientos sociales en la configuración estatal y la amplitud-intensidad de las políticas

públicas y las interrelaciones dinámicas de la coyuntura heterónoma y las correlaciones de fuerzas nacionales, subrayando el papel de los movimientos sociales, principalmente en la formación de las directrices de las políticas públicas. Las elaboraciones son oriundas de investigaciones de reflexión teórica llevada a cabo a partir de los últimos cinco años.

La elección de estos países busca ilustrar la diversidad de situaciones: en Bolivia se verifica una mayor interferencia de las demandas populares en la composición de las deliberaciones gubernamentales, así como de las reformas estatales abocadas al atendimiento de sus reivindicaciones; en el caso de Brasil, la composición gubernamental en cuanto al atendimiento de las demandas puede calificarse en un nivel intermedio y en México, los gobiernos claramente refractarios han reaccionado con intensa represión estatal a las demandas de movimientos sociales.

Las políticas públicas en los países latinoamericanos: directrices externas e internas

Al estudiar el papel del Estado como promotor de las políticas públicas es necesario considerar la complejidad del ejercicio del poder en la sociedad contemporánea de clases. Así, es posible verificar que la selectividad estructural a partir del Estado visa dar cuenta de la diversidad de configuraciones que asumen las fuerzas en su comando y las políticas públicas, relacionadas con ellas. Esta selectividad estructural puede ser concebida como la transcripción en el conjunto de instituciones estatales de las capacidades que las fuerzas políticas nacionales alcanzan en una dada coyuntura para realizar sus estrategias e intereses a través del acceso a espacios de poder en el seno del Estado [7].

Esto implica que las directrices hegemónicas de las políticas públicas – que se encuentran influenciadas por la heteronomía de los países latinoamericanos [8] – son asimiladas y elaboradas

por las correlaciones de fuerzas circunstancialmente instaladas en el gobierno, el juego de intereses entre los componentes del bloque en el poder y la intensidad organizativa de las fuerzas sociales preparadas para disputar la hegemonía con la clase dominante.

La diversidad de formulaciones e implementaciones que las políticas públicas asumen no anulan el carácter de clase demarcadas por las relaciones infraestructurales territorializadas. Al resaltar que se trata de una relación social y dinámica es necesario enfatizar que no deja de estar sumergida en las relaciones capitalistas [9].

El ejercicio del poder estatal implica también una estrecha relación con su comando. Así, para analizar la dinámica del poder estatal a partir del inicio de este siglo es indispensable considerar la composición gubernamental. En ese sentido debe innegablemente indagarse en las relaciones del bloque en el poder – o bloque histórico –, proveniente de las elaboraciones de Nicos Poulantzas y Antonio Gramsci, así como lo que Jaime Osorio [10] denomina como clase reinante – la cual frecuentemente se constituye como coalición gobernante – que eventualmente puede estar parcial o totalmente asimilada al bloque en el poder.

Considerando las persistentes relaciones políticas subalternas que los países latinoamericanos experimentan en el ámbito del imperialismo, es indispensable comprender las características particulares que las directrices de las políticas públicas asumen a nivel nacional. Esas relaciones de dominación están vinculadas al papel que las potencias hegemónicas les designan en el ámbito de la distribución internacional del trabajo y de la apropiación de la riqueza producida [11]. Esa situación puede observarse en los límites que frecuentemente gobiernos progresistas, o de izquierda dentro del orden, asienten cuando llevan a cabo la elaboración y ejecución de políticas públicas redistributivas.

En ese contexto, durante las últimas tres décadas, los países latinoamericanos, en el núcleo de la geopolítica a la que los mismos son compelidos, construyeron mecanismos estatales que condujeron heterogéneamente a fragilizar las exiguas políticas de protección social. En nombre de un perenne “ajuste fiscal”, los Estados occidentales, entre ellos los latinoamericanos, toman determinaciones que conducen a la precarización del trabajo; a una mercantilización creciente de los medios para satisfacción de las necesidades sociales; a un activismo estatal en la inducción de una estabilidad financiera a nivel macro; creciente privatización de la infraestructura nacional y fortalecimiento de las corporaciones transnacionales.

Este conjunto de políticas para América Latina, llevadas adelante con el impulso de las organizaciones multilaterales (Banco Mundial y FMI, como actores sobresalientes), fue suministrado diacrónica, persistente e indistintamente en los países de la región como apuntan Marcela Pronko y João Márcio Pereira [12], Antony Anghie [13], José Francisco Puello-Socarrás y María Angélica Gunturiz [14].

La traducción nacional de estas invectivas fue mediada por la correlación de fuerzas y por las características geopolíticas de cada uno de los Estados. La sincronía e intensidad en la implementación de esas directrices neoliberales están vinculadas con las características del bloque en el poder, así como de las coaliciones gubernamentales, y, principalmente con la fuerza que los sectores subalternos (organizados en sindicatos de trabajadores y de los movimientos sociales, ocasionalmente inseridos en partidos políticos) detengan en determinada coyuntura.

En síntesis, esas mediaciones dinámicas permiten delinear la arquitectura de las políticas públicas en el contexto contemporáneo. En ese ámbito analítico las políticas públicas contemplan todo aquello que el Estado hace o deja de hacer en relación del capital con los trabajadores. La extensión e

intensidad de la mediación estatal es una función de la relación de fuerzas geopolíticas nacionales – sin relegar la mencionada heteronomía y considerando el Estado construido como propulsor de los imperativos de la reproducción del capitalismo, que a través de diversos mecanismos sociales expropia a los trabajadores, la mayoría de la población.

En los períodos cuando los cambios de gobiernos permiten significativas transformaciones en la composición social de la clase reinante – esto es, los sectores sociales que acceden al gobierno – las políticas del Estado pueden proponerse el atendimento coyuntural de las demandas sociales de sectores históricamente discriminados o, como acontece recurrentemente, de los sectores con mayor capacidad reivindicativa. En el ámbito de las políticas públicas, los Estados argentino y brasileño focalizaron su atención en el alivio de la pobreza, a través de una diversidad de políticas de complementación de ingresos y delegando tendencialmente al mercado el suministro de los servicios. Si consideramos que la arquitectura y el funcionamiento del Estado es indisociable de la reproducción del capitalismo, aunque se asuman varias facetas y, a pesar, o mismo como consecuencia, de sus crisis económicas y políticas coyunturales, la riqueza producida por la sociedad continúa concentrándose en pocas manos. Esto implica que su heteronomía se presenta con fuerza en el diseño del Estado en la periferia: nos referimos a las interferencias significativas que el país hegemónico y sus estructuras jerárquicas ejercen en el proceso decisorio de las acciones estatales [15, 16].

Esta subordinación de los países latinoamericanos, con significativas particularidades, puede ser mejor comprendida considerando la dinámica del imperialismo y su contemporaneidad [11]. Sintéticamente, se presenta como doble determinación a la que están sometidos los países latinoamericanos, interna y externamente, consecuencia de las tensiones de clase dentro de sus fronteras nacionales y debido al

rol asignado por la geopolítica mundial, a los cuales puede sobreponerse, reforzándolos o confrontándolos, inclusive atenuando, coyunturalmente.

La sincronía e intensidad en la implementación de esas directrices neoliberales están vinculadas a las características de los sectores dominantes, así como de la clase reinante, y, principalmente, de la fuerza con que los sectores subordinados (sindicatos de trabajadores y movimientos sociales) consigan defender sus reivindicaciones en determinado momento.

La incidencia de los movimientos sociales en la escena política

La diversidad histórico-estructural que marca la formación de los países latinoamericanos persiste en la contemporaneidad, en el ámbito de las relaciones dinámicas alrededor de las transformaciones del Estado y las luchas sociales. El desafío en analizar la estatalidad latinoamericana convoca los debates de las teorías del imperialismo, asociadas a las relaciones centro-periferia reelaboradas por las visiones críticas de las teorías de la dependencia, a las cuales podemos añadir las del sistema-mundo moderno colonial; así como de su incorporación a las teorías del Estado que, a su vez, atribuye dinámica a su configuración de acuerdo con la lucha de clases, sin perder de vista la esencia de su carácter dominante y su indispensable papel para la acumulación capitalista.

Analizar la dinámica del Estado y las políticas públicas en estas casi dos décadas de este siglo, destacando la heterogeneidad latinoamericana, implica resaltar su maleabilidad y permeabilidad, interna y externa, en el ámbito de la disputa por la hegemonía de los proyectos de sociedad [17]. (Un eventual cambio hegemónico requiere rupturas en la infraestructura de la sociedad, principalmente en el régimen de propiedad vigente, lo cual implica en la necesidad de la lucha para su consecución).

Desde el punto de vista de los trabajadores consideraremos los movimientos sociales y los partidos como organizaciones colectivas que llevaron adelante las luchas del último período.

En perspectiva amplia es posible concebir los movimientos sociales, como lo expresa Enrique Dussel [18], relacionándolos con los grandes movimientos populares que marcan una incisiva interferencia del pueblo en la escena política, tornándose en un importante actor político colectivo. Tal situación puede conseguir configurar, inclusive, un potencial “Estado de rebelión” como eventual suspensión o ruptura de un “Estado de excepción” erguido por el poder hegemónico vigente. Podríamos quizá citar como ejemplo el caso de Argentina durante 2001-2021, así como los de Ecuador y Bolivia a partir de finales del siglo XX y durante el primer lustro del corriente.

Episodios de la historia reciente constatan esa lectura, pues en el transcurso de las luchas en América Latina por el acceso a los bienes sociales para la mayoría de la población, particularmente a partir de la segunda mitad del siglo XX, se presenta una bipolarización de la lucha por la hegemonía en el ámbito de la Guerra Fría que conllevó a un encapsulamiento de las luchas en el estricto entorno del Partido Comunista, bajo la tutela del PCUS. Esta situación se agudiza en el contexto de la consolidación de la Revolución Cubana y su inserción al bloque liderado por la Unión Soviética, pues al mismo tiempo en que fortalece su influencia partidaria debilita los posibles procesos políticos autónomos de organización política en una senda alternativa al capitalismo periférico.

Dicha dinámica ha catalizado gran parte de la protesta social, relacionada con aquellos movimientos dedicados a la confrontación a los regímenes como a los sistemas políticos y económicos, llevando inclusive a que los movimientos sociales se tornen expresiones colaterales o extensiones de organizaciones partidarias. Al mismo tiempo, esa situación ciertamente contribuyó para que, ante la desaparición del

esquema bipolar, los movimientos sociales – así como los partidos antisistema – resultantes de esa vinculación, hayan desistido de aquel y, hasta la contemporaneidad, de otros horizontes emancipadores al capital [19, 20].

Esa aproximación de los movimientos sociales con los Estados latinoamericanos en este siglo se contraponen a la oposición excluyente que preponderaba en la segunda mitad del siglo pasado. La coyuntura, que se caracteriza por intensas movilizaciones en diversos países, provocará una gradual inserción de miembros de esas organizaciones en las reparticiones estatales, así como también a depender de programas de fomento gubernamentales para llevar adelante actividades importantes para su existencia.

En ese sentido, según Esteban Iglesias [21], el Estado puede haber colonizado, cooptado y burocratizado los movimientos sociales por medio de una diversidad de mecanismos y estrategias. Esa creciente involucración tiende a ser naturalizada y, a veces, valorizada como forma de alcanzar más fácilmente las reivindicaciones específicas de su agrupamiento al pertenecer al aparato estatal. Las contradicciones derivadas de esas estrategias se agudizan en pocos años, que pueden ser asimiladas como de un combate sin cuartel a una incorporación al Estado.

Si las luchas de los movimientos sociales y de los partidos de izquierda se diseñaban “contra el orden”, y por lo tanto contra el Estado, durante la Guerra Fría, al final de ésta la disputa por la transformación social sería internalizada en una pugna por el control del Estado, principalmente por tentativas de cambios por dentro de la institucionalidad y la legalidad vigentes.

Estamos refiriéndonos no solamente a cargos electivos, sino de cargos de confianza de los gobernantes – particularmente durante los gobiernos progresistas. La ascensión de gobiernos de frente popular aproximó e incorporó formalmente numerosos dirigentes y sectores de movimientos sociales y partidos

políticos anteriormente opositores al régimen y/o al Estado. Los riesgos que esa integración al aparato estatal puede haber provocado a la autonomía organizativa, que asume diversos aspectos, desde el proceso decisorio interno hasta sus finanzas, deben ser analizados caso a caso. Inclusive la dimensión de la militancia involucrada en las acciones estatales puede, eventualmente ser considerada como una variable preponderante, que alcanza el orden de millones, como en los casos de Brasil, Ecuador y Bolivia [19].

En general, los movimientos sociales en el período en análisis desempeñaron un papel protagónico en la escena política latinoamericana, lo cual puede estar relacionado con la gradual erosión del sistema representativo – en algunos casos con significativas transformaciones en todo el espectro partidario –, a partir de la última década del siglo pasado. La consideración de ese debate puede conducirnos también a la relación de los movimientos sociales con su carácter de clase, para lo cual nos aproximamos de las elaboraciones de Eliel Machado [22, 23] al afirmar la labilidad coyuntural que esa vinculación puede asumir.

Bolivia

El caso boliviano suele ser apuntado como el modelo más avanzado en cuanto a interferencia de los movimientos sociales en el Estado, siendo resultado de un largo periodo de luchas, que se intensifican al inicio de este siglo, entre ellas las luchas por el agua en Cochabamba, así como otras intensas luchas en El Alto, La Paz y Santa Cruz de la Sierra.

El confrontamiento al Estado, protagonizado por las organizaciones indígenas alrededor de sus demandas históricas por la autonomía en sus territorios y la participación en los asuntos estatales, resultó en el fortalecimiento de la lucha contra el neoliberalismo de los gobiernos bolivianos durante el primer lustro del siglo.

En el transcurso de las movilizaciones durante su confrontación al Estado fueron construyéndose alianzas entre las diversas organizaciones indígenas y otros sectores sociales movilizados, que fueron convergiendo en la ascensión de Evo Morales como interlocutor. Entre 2007 y 2008 un proceso constituyente incorpora significativas reivindicaciones de las sociedades tradicionales, entre las que pueden destacarse el reconocimiento de grados de autogobierno indígena, lo cual se manifiesta también en un característico pluralismo jurídico, que tienen como objetivo principal la protección colectiva de los territorios indígenas.

En términos de políticas públicas es posible observar una diseminación de políticas educacionales que ampliaron el acceso de sectores sociales históricamente discriminados, aumentando y diversificando establecimientos estatales. Al mismo tiempo, se crea un amplio espectro de políticas de complementación de ingresos (entre los que destacamos el Bono Juana Azurduy, el Bono Juancito Pinto y el Bono Dignidad), en la búsqueda esparcida por Latinoamérica de redistribuir recursos para los más vulnerables. Durante la gestión Movimiento al Socialismo (MAS), además de la nacionalización de las empresas de hidrocarburos, se contempla la inversión estatal selectiva en carreteras y medios de transporte.

A pesar de una serie de avances sociales, las críticas que los movimientos sociales indígenas van a manifestar en transcurso del gobierno de Evo Morales se acumulan desde antes de esos procesos de reforma del Estado, relacionados principalmente en las concepciones que orientan la configuración de una plurinacionalidad substantiva del Estado boliviano. El proyecto de desarrollo que el gobierno ha venido promoviendo [24, 25] ha sido intensamente criticado por sus concepciones indigenistas, particularmente por la desconsideración de las reivindicaciones históricas de las sociedades tradicionales [26-28].

Desde su discurso de posesión como presidente la referencia que se hace al gobierno es de un “gobierno de cambio”, y no de los movimientos sociales, lo cual marca una diferencia fundamental con las expectativas de las organizaciones indígenas. La gradual substitución de miembros indígenas por mestizos en su gabinete puede ser interpretada como símbolo de un alejamiento de los movimientos sociales que han viabilizado su gobierno. La forma de relación que el gobierno de Morales decidió establecer con las organizaciones sociales, es una alianza corporativa con los que aceptan subordinarse y que excluyen a las no asimilables, debilitando a esas organizaciones a través de la cooptación de sus dirigentes o sectores de ellas. Un mecanismo de esta estrategia es la creación de organizaciones paralelas a las organizaciones más importantes, ante la dificultad de desplazar a los liderazgos autónomos de las organizaciones sectoriales, por liderazgos del MAS, para ello se crean organizaciones con el mismo nombre sirve para neutralizar o eliminar a las direcciones no subordinadas y fortalecer sólo a las subordinadas [29, p. 177].

Los mecanismos descritos se traducen en el debilitamiento de los movimientos sociales indígenas autónomos en la incidencia directa de las determinaciones nacionales, ante un sector gobernante que declara representarlos, siendo que al mismo tiempo obstaculiza su participación en las decisiones estatales. Los episodios relatados de distanciamiento de la cúpula estatal de los sectores que lo apoyaran para su asunción son aspectos que podrán ganar contornos dramáticos en su manutención con legitimidad.

Al mismo tiempo, no es posible negar las dificultades enfrentadas por el gobierno de Morales para lidiar con los sectores empresariales, con destaque para los radicados en Sucre y Santa Cruz de la Sierra, no se justifica el tratamiento de asimilación a aquellos por las críticas elaboradas por los movimientos sociales autónomos.

En el ámbito de las contradicciones en las que se encontraba el gobierno, gozando de buena popularidad a nivel mundial como portavoz de los indígenas y defensor de la naturaleza y de la ecología, se destaca el enfrentamiento en su país a las propias comunidades indígenas en favor de acuerdos transnacionales que buscaban materializarse en proyectos de infraestructura y extractivismo [28, 30, 31].

Independientemente de las críticas al gobierno de Morales en relación a los movimientos sociales indígenas, es posible considerar el carácter “destituyente” [32] que éstos últimos conquistaron por su elevado grado de organización y su amplia capacidad de movilización social. La construcción de un Estado Plurinacional, con el reconocimiento de las naciones indígenas, respetando sus tradiciones y territorios puede ser una medida importante para evaluar la incidencia de sus demandas. En última instancia, persisten los desafíos por la superación de la aparente formalidad de esos cambios y por la substancial transformación del carácter del Estado boliviano [28, 33].

Brasil

Las movilizaciones sociales asomaron con fuerza en la escena política brasileña en los últimos años de la longeva dictadura militar (1964-1985). La abertura democrática está relacionada con multitudinarias movilizaciones por elecciones presidenciales directas, así como de emergentes movimientos sociales relacionados con luchas por reivindicaciones en el campo y en la ciudad que se encontraban sin avances. La Constituyente de 1988 plasma, de alguna manera, el despliegue de una gama significativa de movimientos sociales, vinculados principalmente con demandas relacionadas a la salud, a los derechos de niños y adolescentes, de trabajadores y jubilados, las territorialidades campesinas, indígenas y de afrodescendientes, entre un amplio espectro de mediación estatal, resultado de intensas luchas.

El gobierno que asume luego de ese proceso, frecuentemente resaltado por la conquista de derechos sociales, se caracteriza por llevar adelante de forma decidida directrices neoliberales, desconsiderando en buena medida las conquistas contenidas en la flamante Carta Magna y enfrentando con fuerza los movimientos sociales en el campo y la ciudad. La última década del pasado siglo fue marcada por el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) que consiguió privatizar importantes empresas y bancos estatales, así como arremetió contra los derechos laborales, precarizó las políticas estatales de salud y educación.

Durante su primer mandato los movimientos sociales y sindicales, fueron atacados en sus formas organizativas y derechos conquistados, mientras que durante el segundo fueron consolidándose en sus luchas. La represión y, frecuentemente, criminalización de las protestas estuvo presente hasta el inicio de este siglo. A pesar de haber instaurado tímidos programas de complementación de ingresos, la pauperización de la población era significativa.

La asunción de la alianza progresista encabezada por el Partido de los Trabajadores (PT), encabezado por Luiz Inácio Lula da Silva, fue respaldada por la gran mayoría de los movimientos sociales. Inclusive muchos de sus militantes y dirigentes se incorporaron al aparato estatal, desde los niveles locales hasta nacionales.

Durante su primer mandato las luchas disminuyeron considerablemente, lo cual puede ser relacionado con las expectativas y luego con la obtención de conquistas en los ámbitos educacional, laboral y de infraestructura. Aumentos del salario mínimo, así como una significativa expansión y posterior consolidación de la *Bolsa Família* marcaron la reducción de la desigualdad social, así como fortalecieron el poder adquisitivo y disminuyeron el desempleo. El ritmo de las privatizaciones prácticamente se detuvo, a pesar de que las denominadas Asociaciones Público-Privadas (*Parcerias Público-Privadas*)

ocuparon su lugar como continuidad de las directrices neoliberales.

No hubo en los gobiernos de Lula una intervención significativa en la estructura institucional, se añadieron espacios estatales para atender a demandas sectoriales (como las cuestiones raciales y de género), al mismo tiempo, las mencionadas reformas dejaron intactas la dominación estatal [34].

Por cuenta de la composición de centro-izquierda en los gobiernos del PT, sin desmerecer la coalición con sectores de derecha, los movimientos sociales manifestaron aproximación, inclusive contribuyendo con militantes en diversos espacios estatales en los diferentes niveles. En el primer período de su gestión ha sido más intensa la actuación de los movimientos sociales en su seno, principalmente en la elaboración y ejecución de políticas públicas. Facilitadas por la proliferación de instancias participativas en diversos ámbitos, han participado activamente en ese período gestionando convenios y programas gubernamentales [35].

En ese sentido es posible verificar que los movimientos sociales no solamente han desafiado al poder del Estado, sino que también establecieron relaciones de cooperación, frecuentemente tornándose elaboradores y ejecutores de las políticas sectoriales de su interés; lo cual se aproxima con la noción de “cooperación conflictual”, que parece ser apropiada para caracterizar la relación a que estamos refiriendo [35].

Eso no ha impedido mantener grados relativos de autonomía de algunos sectores sociales (entre ellos, la educación y el campesinado), a pesar de que sus acciones fueron menos sentidas por toda la población. Es diversa la gama de movimientos sociales que se incorporaron de variadas formas y magnitudes [36], al mismo tiempo, en que la conflictividad que se ha mantenido también evidencia una multiplicidad de contestaciones y manifestaciones.

En el caso de los movimientos sociales de lucha por la tierra que se confrontan abiertamente con el proyecto neodesarrollista

centrado en el extractivismo, los gobiernos del PT mantuvieron una política que, en última instancia, conllevó al fortalecimiento de los sectores terratenientes, aliados al agronegocio [37].

La dinámica de la relación llevada adelante por el Estado, dirigido ya entonces por el Frente Brasil Popular, se inicia con una estrecha relación entre los movimientos sociales organizados y el atendimento parcial de sus reivindicaciones, frecuentemente incorporándose al aparato estatal, manteniendo todavía al fin del gobierno Lula dicha proximidad con escaso atendimento de las reivindicaciones de los movimientos. (Entre diversos indicadores son importantes para el análisis de esa relación dinámica son los relativos a la violencia en el campo y la tendencia a disminuir atribuciones territoriales) [38].

La presidenta Dilma Rousseff (2011–2016) no buscó interlocución con los movimientos, en su segundo mandato su alejamiento puede ser comprendido como inversamente proporcional a la proximidad construida con sectores del agronegocio y financiero. La represión a las manifestaciones fue creciendo a medida en que se distancia de los movimientos sociales, lo cual puede haber contribuido a la escasa resistencia en el momento de su *impeachment* [39].

En síntesis, es posible observar que movimientos sociales obtuvieron una serie de conquistas, aunque parciales, que estaban construidas en programas de gobierno y no consiguieron transformar (quizás tampoco pretendieron) las bases de la apropiación de la riqueza socialmente producida. A pesar de la abrumadora aceptación popular del gobierno Lula, al final de la primera década no hubo transformaciones en la estructura de los poderes gubernamentales y tampoco en los poderes fácticos, como, por ejemplo, los medios de comunicación corporativos.

México

El caso mexicano se presenta de forma singular en comparación con otros países latinoamericanos de su porte. La historia de la región rural mexicana está marcada por la

Revolución Mexicana de 1910, que inició un proceso de reforma agraria que desconcentró la tenencia de la tierra en una parte considerable del territorio durante el siglo XX. Esa dinámica, entre tantas otras ramificaciones, ha fortalecido la lucha por la tierra [40].

Poco después de la mencionada revolución la sucesión de gobiernos, por casi siete décadas fue comandada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Esa situación ha contribuido para la escasez de espacios de diálogo entre los sectores populares y el Estado, puesto que para los movimientos sociales (indígenas y campesinos) obtener audiencia fueron necesarias movilizaciones multitudinarias, frecuentemente aliadas a los sindicatos. Esa situación se agrava con la denominada contrarreforma agraria de 1992 en el ámbito de las medidas neoliberales que afecta directamente las comunidades tradicionales y campesinas.

Los gobiernos que le sucedieron hasta el final de la década pasada, solo recibían a los movimientos sociales cuando por las dimensiones de su movilización llegaban a la plaza central de la Ciudad de México, El Zócalo. La criminalización de la protesta social recorre más de un siglo, eliminando líderes del campo y de la ciudad, constatando la composición elitista de los partidos del orden [41].

Los espacios políticos gubernamentales fueron persistentemente refractarios en el diálogo con las demandas populares, sean de los movimientos sociales o sindicales; la participación escasa de representantes populares en espacios estatales locales, tanto por sus dimensiones como por la participación en el desarrollo de las políticas, no puede ser llevada en consideración como excepción de la norma que los ha criminalizado.

Los movimientos sociales poseen una infatigable historia de luchas. Los indígenas, entre los cuales los más destacados se encuentran en la región sur del país, se diferencian histórica y contemporáneamente por la defensa de sus territorios y modos

de vida. Entre ellos sobresalieron en la escena política en 1994 por la fuerza de su organización autónoma confrontándose con las políticas gubernamentales de asociación al poder hegemónico internacional los zapatistas organizados en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Importantes luchas fueron conducidas por estudiantes y sindicatos (entre ellos, los maestros) en diversos momentos de ese largo período de gobiernos del PRI y sus aliados, desmovilizados con intensas represiones y arrestos.

Después de setenta años de control estatal por el PRI, se establece en el gobierno el Partido Acción Nacional (PAN) (2000–2012), sin que se observen cambios perceptibles en términos de políticas públicas o de interlocución con las organizaciones populares. La faz coercitiva del Estado ha sido implacable con las protestas, puesto que en las últimas cuatro décadas, con la justificativa del combate al tráfico de drogas, se fortalece aún más, incluso su letalidad y arbitrariedad alcanza niveles que parecen escapar a los mandos gubernamentales nacionales.

Asimismo, desde el inicio del presente siglo numerosas movilizaciones, no solamente de las comunidades indígenas, marcan presencia en el escenario político mexicano. El protagonismo de los medios de comunicación (concentrados en dos grandes corporaciones), con una persistente criminalización de los movimientos sociales ha sido clave en cuanto al trato recibido por el Estado. La convocación de las Fuerzas Armadas para reprimir las manifestaciones sociales provocó numerosas detenciones, muertes y desaparecidos entre los protagonistas populares [42].

A diferencia de los otros dos casos nacionales anteriormente referidos no se observa la incorporación de estos movimientos a los aparatos estatales, al menos a nivel nacional. La fuerza de los movimientos indígenas, que a veces controlan regiones y municipios, los coloca al frente de una disputa localizada en el

sur del país por el ejercicio del poder. En estos últimos casos, la manutención de la autonomía y la soberanía de sus tradiciones ancestrales se fusionan con la lucha por sus territorios, de carácter indisoluble.

La conflictividad de los movimientos sociales rurales está vinculada con el persistente carácter refractario de los intereses oligárquicos, vinculados a los de corporaciones transnacionales y de los grandes conglomerados empresariales, frecuentemente asociados con intereses extranjeros [43].

Conclusiones

Pocas han sido las experiencias nacionales en América Latina que han escapado al vendaval neoliberal hasta los inicios de este siglo, puesto que justamente como forma de reacción social y producto de una coyuntura específica, los gobiernos progresistas diseminaron políticas que buscaron mitigar esas directrices neoliberales. La diversidad de configuraciones que los gobiernos asumieron en el intervalo mencionado no permite afirmar que estamos ante su ocaso, pues, a pesar que dos de los principales países del Sur Global en términos geopolíticos – Argentina y Brasil – sucumbieron durante el cuarto lustro de este siglo a gobiernos que tendencialmente reducen el papel estatal en la cobertura social, Bolivia y Venezuela resistían, no sin dificultades, a los cimbronazos hegemónicos.

En este estudio se evidencia la importancia de los movimientos sociales en los escenarios políticos latinoamericanos. Sus relaciones con los partidos políticos que coyunturalmente traducen su vigor parecen relacionarse con la capacidad organizativa de una plataforma política que consiga transformar la sociedad, en tiempos de búsqueda por nuevas o viejas utopías.

Aunque también debemos considerar que la incidencia de los movimientos sociales en las políticas estatales desafía la institucionalidad liberal, pues es un actor externo a la disputa legitimada del poder estatal. Esta reflexión nos conduce por la

senda del debate alrededor de la representatividad, tan cuestionada por la corrupción de variadas índoles que a menudo afloran, pero que se erigen en un enigma aparentemente indisoluble en el juego frecuente de “cartas marcadas” en el ámbito del régimen político.

La asunción de los movimientos sociales, al menos coyunturalmente, disloca los sindicatos como representantes clasistas y populares, inclusive cuestiona las simbiosis recurrentes de estos con partidos y/o gobiernos, y, de otro vértice de la institucionalidad, se construye y por veces permanece exterior al Estado.

Las experiencias de los movimientos sociales en Bolivia, Brasil y México vislumbran el vigor de las disputas por el poder político, siendo que en el primer caso es posible concebir una marcada interferencia, inclusive con la creación de nuevas institucionalidades. Para el caso de Brasil, aunque consideremos su inserción en los espacios estatales, la intensidad de su interferencia deja indemne la estructura primaria de dominación, por lo cual sus mudanzas se demuestran efímeras. En México las luchas sociales no cedieron en ningún momento, pero al mismo tiempo no consiguieron, por ahora, alcanzar el Estado para implementar sus demandas.

Una lectura sintética de las dinámicas de las luchas confirma al Estado en el centro de las disputas por las fuerzas sociales que deben prevalecer en las sociedades latinoamericanas. La doble determinación a la que el Estado periférico se encuentra sometido, su obstinada heteronomía de herencia colonial y la alianza de las oligarquías nacionales, evidencia la franca contraposición con las infatigables luchas que los subalternados realizan en niveles nacionales por la supervivencia y por condiciones dignas de vida. Al mismo tiempo, en virtud de la creciente importancia que la lucha en el seno del Estado adquiere en este siglo, la institucionalidad estatal se confirma como arena de la lucha de clases en estas sociedades.

La diferencia dinámica que se verifica en los tres casos mencionados se manifiesta también en el diseño que las políticas públicas, provenientes del Estado, asuman rasgos de ese embate. Siendo que para el caso boliviano se verifican políticas estatales amplias en la inclusión principalmente de las comunidades tradicionales como corolario del vigor de su fuerza en el escenario político; en el Brasil del Frente Popular también se constata un incremento mediado de la recepción de las demandas populares en el ámbito estatal, aunque con escasa incidencia institucional y de corta duración; en México el Estado se mantuvo refractario a una aproximación con los movimientos sociales, con una faz coercitiva en su relacionamiento, sin respuestas estatales elaboradas por los demandantes.

A pesar de la correlación de fuerzas desfavorable para los subalternos, con mayor intensidad desde la última década del pasado siglo, las luchas sociales tienden a intensificarse, tornando urgente la necesidad de (re)construir un programa político y socioeconómico mínimo para aglutinar las fuerzas en disputa por la hegemonía – debilitada por la presumida falencia de las sociedades igualitarias y el acriticismo en torno de las experiencias que la alimentaron. El protagonismo de los movimientos sociales de este período delinea un conjunto de transformaciones en el campo de las reivindicaciones feministas, indígenas, campesinas y ecológicas.

Mientras tanto, ideologías conservadoras mancomunadas con el ideario neoliberal se esmeran en naturalizar las desigualdades sociales, apoyadas por una tendencia oligarquizante de los gobiernos, potencializando la polarización política y social. Esa tendencia indica que no existen posibilidades de mejoría en las condiciones de vida de la mayoría creciente de la población sin luchas sociales, lo cual viene acarreado al aumento de la función represiva del Estado, fortaleciendo el latente estado de excepción.

Al mismo tiempo, el escenario actual tensiona los límites de lo socialmente aceptable, lo cual nos plantea la posibilidad de un intenso período de acomodación ideológica y social o la intensificación de las luchas de clases.

Bibliografía References Библиография

1. Quijano A., Wallerstein I. La americanidad como concepto, o América en el moderno sistema mundial. *Revista Internacional de Ciencias Sociales*, 1992, vol. XLIV, no. 4, pp. 583-591.

2. Dussel E. 1492: El encubrimiento del Otro. Hacia el origen del “mito de la Modernidad”. La Paz, Plural Ediciones, UMSA, 1994.

3. Suárez Salazar L. Madre América: un siglo de violencia y dolor (1898-1998). Frankfurt/La Habana, Editorial Zambon, 2003.

4. Boron A. América Latina en la Geopolítica del imperialismo. Buenos Aires, Luxemburg, 2012.

5. Johnson G.A., Silva M.A. A “vocaçãõ” extrativista latino-americana e os movimentos sociais. *Revista de Políticas Públicas*. São Luís, 2014, no. especial, pp. 219-223.

6. Thwaites Rey M.C., Ouviaña H. El ciclo de impugnación al neoliberalismo en América Latina: auge y fractura. En: Ouviaña H., Thwaites Rey M.C. Estados en disputa: auge y fractura del ciclo de impugnación al neoliberalismo en América Latina. Buenos Aires, El Colectivo, 2018, pp. 17-61.

7. Jessop B. Desarrollos recientes en la teoría del Estado – enfoques, problemas, agendas. Bogotá, El Siglo del Hombre, 1999.

8. Johnson G.A., Silva M.A. Heteronomía, progresismo y políticas públicas en América Latina. *Sociedad y Economía*, 2019, no. 37, pp. 71-86.

9. Jessop B. The State – Past, Present, Future. Cambridge, UK, Polity Press, 2015.

10. Osorio J. O Estado no centro da mundialização: a sociedade civil e o tema do poder. São Paulo, Outras Expressões, 2014.

11. Wood E. O Império do Capital. São Paulo, Boitempo, 2014.

12. Pereira J.M.M., Pronko M., eds. A demolição de direitos: um exame das políticas do Banco Mundial para a educação e a saúde (1980-2013). Rio de Janeiro, Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, 2014.

13. Anghie A. Imperialism, Sovereignty and the Making of International Law. New York, Cambridge University Press, 2004.

14. Puello-Socarrás J.F., Gunturiz M.A. ¿Social-neoliberalismo? Organismos multilaterales, crisis global y programas de transferencia monetaria condicionada. *Política y Cultura*, 2013, no. 40, pp. 29-54.

15. Fernandes F. Poder e contrapoder na América Latina. Rio de Janeiro, Zahar, 1981.

16. Harvey D. O novo imperialismo. São Paulo, Loyola, 2004.

17. Oliver L. La ecuación Estado-sociedad civil en América Latina. Movimientos sociales y hegemonía popular. México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 2016.

18. Dussel E. El pueblo y el poder liberador. En: Martínez R.M., ed. Los movimientos sociales del siglo XXI – Diálogos sobre el poder. Caracas, El Perro y la Rana, 2008, pp. 239-252.

19. Bringel B., Falero A. Movimientos sociales, gobiernos progresistas y estado en América Latina: transiciones, conflictos y mediaciones. *Caderno CRH*. Salvador, 2016, vol. 29, no. SPE 03, pp. 27-45.

20. Svampa M. Movimientos sociales, matrices socio-políticas y nuevos escenarios en América Latina. Kassel, Universitat Kassel, 2010.

21. Iglesias E. De la colonización de la sociedad civil a las tensiones entre partidos en el gobierno y movimientos sociales. *Lua Nova*. São Paulo, 2012, no. 87, pp. 113-137.

22. Machado E. Contribuições para uma teoria política marxista dos “movimentos sociais”. *Lutas Sociais*. São Paulo, 2015, vol. 19, no. 35, pp. 54-64.

23. Machado E. Notas para una tipología marxista dos movimentos sociais. *Crítica Marxista*, 2018, no. 46, pp. 83-101.

24. García Linera Á. Identidad Boliviana – Nación, mestizaje y plurinacionalidad. La Paz, Vicepresidencia del Estado, 2014.

25. García Linera Á. La potencia plebeya – Acción colectiva e identidades indígenas, obreras y populares en Bolivia. La Paz, Comuna, 2009.

26. Cusicanqui S.R. Ch'ixinakax utxiwa: una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores. Buenos Aires, Tinta Limón, 2010.

27. Cusicanqui S.R. Mito y desarrollo en Bolivia – El giro colonial del gobierno del MAS. La Paz, Piedra Rota, 2015.

28. Regalsky P. Paradojas de la crisis hegemónica, del nacionalismo de Evo y de la confusión en los movimientos indígenas. *Herramienta*, 2011, vol. XV, no. 46.

29. Escárzaga F. El gobierno de Evo Morales y los movimientos sociales en Bolivia. En: Carrillo Padilla J.D. Izquierdas y sociedad – Hacia una historia social en América Latina. Aguascalientes, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 2011.

30. Anthias P. Indigenous Peoples and the New Extraction: From Territorial Rights to Hydrocarbon Citizenship in the Bolivian Chaco. *Latin American Perspectives*, 2018, vol. 45, no. 5, pp. 136-153.

31. Regalsky P. Political Processes and the Reconfiguration of the State in Bolivia. *Latin American Perspectives*, 2010, vol. 37, no. 3, pp. 35-50.

32. Darling V. Reflexiones sobre el poder destituyente de los movimientos sociales en América Latina. *Andamios*, 2013, vol. 10, no. 21, pp. 303-320.

33. Escárzaga F. ¿Construcción del Estado plurinacional o reconstitución del Estado nación en Ecuador y Bolivia? En: Carrillo Nieto J.J., Escárzaga F., Günther M.G., eds. Los gobiernos progresistas latinoamericanos - Contradicciones, avances y retrocesos. Ciudad de México, UAM-Xochimilco, 2016, pp. 63-92.

34. Singer A., Loureiro I., eds. As contradições do lulismo: a que ponto chegamos? São Paulo, Boitempo, 2016.

35. Carlos E. Cooperação e conflito na relação movimentos sociais e Estados. *Política & Sociedade*, 2017, vol. 16, no. 35, pp. 321-350.

36. Carlos E., Dowbor M., Albuquerque M.C. Movimentos sociais e seus efeitos nas políticas públicas. *Civitas*, 2017, vol. 17, no. 2, pp. 360-378.

37. Lerrer D.F. A visibilidade e o silenciamento do problema agrário brasileiro nos governos FHC e Lula. Em: Coelho F., Camacho S., eds. O campo no Brasil contemporâneo do governo FHC aos Governos Petistas. Vol. 1. Curitiba, Brasil, Editora CRV, 2018, pp. 81-105.

38. Sauer S., Mészáros G. The Political Economy of Land Struggle in Brazil under Workers' Party Governments. *Journal of Agrarian Change*, 2017, vol. 17, no. 2, pp. 397-414.

39. Bringel B. Crisis política y polarización en Brasil: de las protestas de 2013 al golpe de 2016. En: Bringel B., Pleyers G., eds. Protesta e indignación global: Los movimientos sociales en el nuevo orden mundial. Buenos Aires, CLACSO; Río de Janeiro, FAPERJ, 2017, pp. 141-154.

40. Bórquez L.C., Ventura S.G. Movimientos campesinos e indígenas en México: la lucha por la tierra. *Observatorio Social de América Latina*, 2005, vol. VI, no. 16, pp. 47-57.

41. Olvera A. La crisis política, los movimientos sociales y el futuro de la democracia en México. *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, 2016, no. 226, pp. 347-368.

42. Rovira Sancho G. La comunicación y los movimientos sociales mexicanos en los últimos 12 años: del duopolio televisivo a los medios alternativos y las redes. En: Salvador M.P., coord. ¿Adónde chingados va México? Un análisis político y socioeconómico de dos sexenios (2000-2012). Madrid, La Catarata, 2012, pp. 143-159.

43. Bórquez L.C., Berlanga H.R. Tierra, territorio y poder a cien años de la reforma agraria en México: lucha y resistencia campesindia frente al capital. En: Almeyra G., Bórquez L.C., Mendes Pereira J.M., Porto-Gonçalves C.W., eds. Capitalismo: tierra y poder en América Latina (1982-2012). Vol. III. Ciudad de México, Continente, 2014, pp. 181-224.